

## **Cesión de datos de abonados a prestadores de servicios de emergencia. Diferencias con la cesión para la elaboración de directorios - Año 2002**

Se planteó a la Agencia si resulta conforme a las normas de protección de datos la comunicación a un Centro de Emergencias de los datos referidos a la totalidad de los abonados al servicio telefónico disponible al público, dado que la citada Entidad ha sido habilitada para la gestión del teléfono de emergencias 112. En particular, la consulta hacía referencia a la previsión contenida en la Directiva 96/19/CE que reconoce el derecho de los abonados a no figurar en los directorios telefónicos.

El problema se plantea en relación con los datos de aquellas personas que hubieran ejercido su derecho de no figurar en los directorios telefónicos, en los términos previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto 1736/1998, reproducidos asimismo por el apartado 4 de la Norma tercera de la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 26 de marzo de 2002, que establece las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado.

Sin embargo, a juicio de la Agencia, no se produciría una contradicción entre ambas normas por el hecho de que se faciliten al prestador del servicio telefónico de emergencia 112 los datos referentes a las personas que hayan ejercitado su derecho a no aparecer en las guías telefónicas o en los servicios de consulta telefónica, dado que el tratamiento llevado a cabo por los prestadores del servicio de información o de elaboración de guías y el desarrollado por las entidades a las que se encomienda la gestión del número de emergencias 112 resulta distinto.

Ello se basa en que la finalidad del tratamiento en uno y otro caso (prestación de servicios de directorio telefónico o información y atención del servicio de emergencias 112) difieren claramente: el primero persigue una finalidad meramente divulgativa, mientras que el segundo se deriva de la atribución otorgada a los distintos entes por la Administración competente para resolver situaciones de emergencia en las que la vida o la integridad del interesado o de terceros puede encontrarse en una situación de riesgo.

Por este motivo, dadas las distintas finalidades perseguidas con el tratamiento, el legislador comunitario y nacional resuelve de manera distinta el supuesto de colisión entre la privacidad de los afectados y la protección de la finalidad perseguida por el tratamiento.

En efecto, las normas nacionales y comunitarias reguladoras del servicio de telecomunicaciones incluyen previsiones sobre la prestación del servicio de directorio e información telefónica en que se reconoce, como norma fundamental, el derecho del afectado a no aparecer en tales directorios o servicios de información. Ello se funda en que, ante la colisión que podría producirse entre la prestación del servicio y el derecho de los terceros a conocer los datos del afectado y el derecho de este último a su intimidad, el legislador comunitario, y posteriormente el nacional, han considerado la

prevalencia de este último, como más digno de protección que el potencial derecho a conocer los datos publicados en el directorio.

Sin embargo, estas mismas normas, al regular la existencia del servicio de emergencias 112, han venido a considerar prevalente el derecho de salvaguardar la integridad de personas o bienes del afectado o de terceras personas e incluso el derecho a atender una necesidad vital del afectado o terceros (que, como ya indicamos, habilita el tratamiento de datos de carácter personal sin el consentimiento del afectado, tanto en la Directiva como en la Ley Orgánica 15/1999), sobre el mencionado derecho a preservar esa intimidad.

Esta diferenciación encuentra su reflejo en la consagración por el artículo 54.3 de la Ley General de Telecomunicaciones del derecho del abonado a no figurar en los directorios telefónicos. Pero este derecho no pudo identificarse en modo alguno con un derecho del abonado a que no se comuniquen a los entes competentes sus datos con el fin de poder atender a situaciones de emergencia.

Así, en desarrollo de la meritada Ley, y del Real Decreto 1736/1998, la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 26 de marzo de 2002 establece dos supuestos claramente diferenciados en cuanto a la cesión o comunicación de los datos de los abonados al servicio telefónico, en atención al destinatario de los datos:

- En cuanto a la cesión para las entidades habilitadas para prestar el servicio de consulta telefónica, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, facilitará a las mismas "la información actualizada que puedan utilizar en sus bases de datos, a la que se refiere el apartado tercero" (número 1 del apartado decimoquinto), en el que se incluye el derecho del interesado a "que se le excluya de las guías telefónicas o de los servicios de consulta telefónica sobre números de abonado" (número 4). De este modo, los datos de quienes desean ser excluidos de este servicio podrían no ser facilitados a estas entidades.

- Sin embargo, en lo referente a la comunicación de los datos a las entidades que presten servicios de llamadas de urgencia a través del número 112 y a las entidades que determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por prestar servicios de llamadas de urgencia a través de números cortos, el número 2 del propio apartado decimoquinto de la Orden dispone que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones comunicará, previa petición, "la información actualizada a la que se refiere el punto 1 del apartado decimocuarto", según el cual los operadores facilitarán a la Comisión los datos de "todos sus abonados", sin distinguir entre quienes desean o no figurar en los directorios telefónicos.

En consecuencia, la norma establece una clara distinción entre ambos supuestos, basada en el hecho de que el derecho del abonado a no figurar en el directorio no implica la posibilidad de que el mismo pueda ejercer un derecho a que sus datos no se faciliten a las entidades prestadoras del servicio telefónico de urgencia.

Por todo ello, la comunicación podrá extenderse, tal y como se indica en la Orden de 26 de marzo de 2002 a los datos de "todos los abonados".

No obstante, es preciso indicar que la limitación al ejercicio del derecho del abonado impuesta por la norma no es absoluta, sino que, en línea con lo que se ha venido razonando, se hace depender explícitamente de la utilización de los datos para la finalidad de prestación del servicio de urgencia. Por este motivo, el apartado decimoquinto de la Orden dispone en su punto 2 que "los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente como soporte para la efectiva prestación de los servicios de atención de llamadas de urgencia, siendo responsabilidad de la entidad prestataria el adecuado uso de los mismos, que estará sometido a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal".